

# HACIA UN MUNDO FELIZ

## ...El imparable declive de EE.UU.

*"Oh, brave new world that has such people in it!"*

**William Shakespeare**

**E**l mundo recibió con altísimas expectativas, rayanas en el trance colectivo, la elevación a la presidencia de EE.UU. de Barack Obama. En 2004 muchos europeos reivindicaban el voto en las elecciones americanas porque, reflexionaban, si esas elecciones tienen consecuencias globales, es justo que los ciudadanos del mundo voten también. Irónicamente, esos mismos europeos no parecen ansiosos por reclamar el voto en unas elecciones para elegir al presidente de Europa, recientemente cooptado en uno de esos cónclaves llamados Consejos Europeos. He aquí, sin embargo, que la elección del presidente Obama, en el que el mundo reconoce justificadamente al primer presidente transnacional y post-americano, ha hecho descender la ansiedad por el derecho a voto en las elecciones americanas de belgas y eslovenos.

Este artículo es una llamada de atención para ellos, así como para escandinavos, ingleses y austriacos y el resto del continente. Deben reclamar de nuevo el voto en las presidenciales estadounidenses, porque los electores americanos no reelegirán al presidente Obama en 2012. También es cierto que el mundo atemorizado por la maquinaria bélica y el espantoso poder del país americano en los últimos sesenta años (al menos según las encuestas en que aparecía junto a Israel como la mayor

---

Álvaro Martín es escritor

amenaza a la paz global) puede respirar aliviado. Esa hegemonía habrá disminuido de manera tangible para entonces. La base de toda hegemonía es la capacidad económica y la base de la base es la cultura del esfuerzo individual, la independencia de pensamiento y la capacidad crítica. La corrupción de la cultura tradicional americana es una enfermedad de la voluntad y es un hecho irreparable. Este artículo se limita a examinar el deterioro económico vertiginoso de EE.UU. durante 2009, al compás de una agenda política enteramente antitética de los derechos individuales y la economía de mercado y –ahora que está de moda el concepto y el espantoso vocablo– de cualquier noción de sostenibilidad a medio plazo.

## **1. EL DÉFICIT INCONTENIBLE E INSOSTENIBLE**

### **Confesiones de un comprador compulsivo**

Desde que el presidente tomó posesión en enero de 2009 ha tirado de chequera pública (puesto que el dinero público no es de nadie, ¿verdad?) impulsando un programa de estímulo fiscal por valor de 787.000 millones de dólares; la expansión de un programa de seguro médico para menores (S-Chip) por valor de 33.000 millones; un presupuesto de gastos corrientes de los doce departamentos de la Administración por valor de 410.000 millones; así como la nacionalización, en esencia, de dos terceras partes de la industria del automóvil, por valor de 80.000 millones, después de hacer uso de 500.000 millones del programa de rescate financiero de las instituciones de crédito aprobado (con su voto de senador y su ejecución como presidente) en noviembre de 2008. Obama ha impulsado también el proyecto de ley sobre cambio climático, que crearía un mercado de créditos de polución en las industrias, con un gasto inicial de 821.000 millones para el contribuyente, en lo que supondría, si lo aprobara el Congreso (aunque está difícil), una transferencia de riqueza sin precedentes desde los trabajadores que cotizan a la hacienda americana hacia los encocorados inversores y gestores, como Al Gore,

---

\* Nota del editor: Los billones que utiliza el autor son europeos, es decir, millones de millones.

de fondos mobiliarios creados para ese fin. Y aún queda lo más espectacular. Por un billón de dólares más (que otras estimaciones elevan a 2,5 billones\*), Obama socializaría, en la medida que le dejen, el sistema sanitario de EE.UU.

El déficit fiscal del Gobierno federal, el día que el presidente Bush dejó de serlo, era de 422.000 millones de dólares. Entre esa fecha y el 31 de octubre, el déficit se había más que triplicado, hasta 1,42 billones o, lo que es lo mismo, un 11,2% del PIB estadounidense (que es algo menos de 14 billones). Éste es un déficit mayor –ciertamente en términos absolutos, pero también en términos relativos respecto del tamaño de la economía– que nada de lo que hayamos visto en los últimos sesenta años, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto es sólo el aperitivo, porque las estimaciones del propio Congreso americano cifran el déficit para el año fiscal 2010 en 9,6%; 6,1% en 2011; y 3,7% en 2012. A partir de entonces, teóricamente se situará en algunos puntos básicos por encima del 3%, según las estimaciones más optimistas, aunque ni la Administración ni el Congreso contemplan equilibrar ingresos y gastos, ni siquiera en alguna fecha indeterminada del futuro. Sin embargo, aun aceptando esas cifras, la deuda pública americana aumentaría desde 5,8 billones en 2008 (un 41% del PIB) hasta 14,3 billones en 2019 (un 68% del PIB) y habría alcanzado un 91% del PIB en 2038. Y, en un escenario más realista, es decir, depurado del optimismo de los políticos, la deuda podría perfectamente duplicar el tamaño del PIB en treinta años.

### **El final de los días para la socialdemocracia americana**

Mientras tanto, no incluidas en estas cifras, aparecen las dimensiones realmente escalofrantes de la deuda cuando uno se acuerda del déficit de caja de los sistemas de Seguridad Social y Medicare (seguro sanitario para los mayores de 65 años). Sólo el déficit de caja de la Seguridad Social (que es una caja aparte de las demás cuentas federales), según los informes de sus propios gestores se acerca a los 30 billones de dólares (más del doble del PIB), entre los ingresos previstos y los gastos comprometidos para los próximos setenta y cinco años.

Las dos únicas salidas de esta situación son la quiebra a lo Dubai (y hay que decir aquí que, dado que la mayor parte de ese volumen de deuda está en manos de acreedores exteriores, EE.UU. estará dentro de una década dedicando más de un 5% del PIB al servicio de los intereses de la deuda externa, cosa de todo punto insostenible) o activar la máquina de imprimir dinero, devaluando así tanto el valor del dólar como, en esa medida, el valor de la deuda. Esto último, que es el mal menor, provocaría el aumento de los tipos de interés, la explosión de la inflación y la continuación *sine die* de la depresión económica y el desempleo, convirtiendo la estagflación de los años 70 en una broma, al lado de lo que se avecina. En último término, todo esto quiere decir que la atonía económica americana devendrá crónica y hará imposible mantener el esfuerzo militar americano en sus niveles actuales. El gasto de defensa, actualmente por encima del 4% del PIB, descenderá, según estimaciones del propio Pentágono, a 3,2% en 2015 y a 2,5% en 2028, un 40% menos del gasto actual. Dicho de otro modo, la lucha contra Al Qaeda la tendrán que llevar otros, la defensa frente a las amenazas a la seguridad europea la tendrán que llevar los europeos (...¡buena suerte!) y la inversión en sistemas defensivos –o agresivos–, que ya no correrán a cargo de EE.UU. ni de los miembros de la UE –todos unidos en el pacifismo y en la inviabilidad de sus respectivos Estados del bienestar–, será asumida por los enemigos de Occidente con gusto, con voluntad y –puesto que no tendrán que mantener Estados del bienestar propios– con recursos.

Naturalmente todos estos problemas estructurales no han sido creados por Barack Obama, ni tampoco por George W. Bush. Pero ningún presidente ha censurado tanto a su predecesor (a tal extremo que, oyéndole, parecería que su elevación a la presidencia habría sido producto de un golpe de Estado que depusiera al dictador de una república bananera en vez de una transmisión democrática de poder), entre otras cosas, por políticas de aumento del déficit, para por su parte y en menos de un año, proceder a poner en marcha políticas llamadas a cuadruplicar la deuda agregada incurrida por todas las Administraciones de EE.UU. desde George Washington hasta George W. Bush incluido. La joya de la corona socializante se llama sanidad, la reforma estrella de Barack Obama y el oscuro

objeto del deseo, no menos socializante, del Partido Demócrata en su conjunto durante las dos últimas décadas.

En cifras de 2008, el tamaño del sector público en EE.UU., un 36,6% de la economía, tal vez no impresione demasiado en Suecia (55%), Francia (53%), Italia (50%), Alemania (45%) o Reino Unido (45%). Pero impresionará mucho en España, donde el tamaño del sector público (38,5%) con relación al tamaño de la economía es muy similar al de EE.UU. Es decir, el país considerado como el centro neurálgico del capitalismo salvaje e inmisericorde tenía, incluso antes de la llegada de Barack Obama, el mismo grado de socialismo económico que la España de José Luis Rodríguez Zapatero. Una de dos, o éste es un capitalista salvaje o EE.UU. es un Estado del bienestar social-democratizante. La verdad se acerca mucho más a lo segundo que a lo primero.

## 2. LA EXTRAÑA MUERTE DEL SISTEMA SANITARIO DE EE.UU.

No es el único cliché que se derrumba al contacto con la realidad cuantificable de los números. Otro es el que los demócratas han atizado con obstinación sobre el sistema sanitario de EE.UU. La idea que la mayor parte de los europeos tiene de la sanidad en EE.UU., gracias a la propaganda de la izquierda americana, es que es un sistema que deja morir a los pobres, que deniega asistencia a la mayoría y que las aseguradoras privadas sólo asisten a los ricos. Y, por eso, dicen, es necesaria la creación de una aseguradora pública que extienda la cobertura a los millones de americanos que carecen de ella y subvencione a la mayoría para la que supone un coste ruinoso. El problema con los cuentos de Dickens referidos a la (antigua) economía de mercado americana es que no son verdad, pero los que los cuentan, personas de sensibilidad social y “solidaria”, se encargarán de hacerlos realidad.

### Mitos, leyendas y el Estado asistencial

En primer lugar hay que subrayar que en EE.UU. la denegación de cuidados médicos a cualquier persona, ciudadano o no ciudadano, resi-

dente legal o ilegal, es un delito y cualquier sala de urgencias de un hospital tiene la obligación legal de atender a enfermos y accidentados. Esa obligación legal fue establecida por el Congreso bajo la Administración Reagan.

En segundo lugar, el gasto en sanidad de los EE.UU. equivale a 2,3 billones de dólares anuales, un 17% de la economía americana, siendo el mayor del mundo. A medida que la población va envejeciendo, el gasto en sanidad irá incrementándose progresivamente hasta un 25% del PIB en 2025, un 37% en 2050, y la mitad de la economía en 2082, si todo se mantiene como hasta ahora. Del total del gasto en sanidad, un tercio, más de 800.000 millones, corresponde a transferencias del Gobierno federal y los gobiernos de los estados a los particulares. El presupuesto de uno solo de estos programas, Medicare, financiado en su totalidad por el Gobierno federal, representa un gasto de un 4% del PIB, una cuantía similar a todo el gasto de defensa de EE.UU.

Contrariamente, pues, a la idea de que el sistema de seguro médico en EE.UU. es un sector controlado por intereses privados, lo cierto es que la colección de programas públicos de asistencia médica suponen la partida presupuestaria más amplia en los Presupuestos Generales de EE.UU., muy por encima de Defensa (la Seguridad Social tiene su propia caja separada de los presupuestos y, como se apuntaba más arriba, en situación de quiebra de hecho). Los mayores de 65 años y las personas con algún tipo de invalidez, 45 millones de personas, entre nacionales americanos y residentes, reciben sus prestaciones del programa *Medicare*, a cargo enteramente del Gobierno federal, que se gasta anualmente del orden de medio billón de dólares. *Medicaid*, financiado al cincuenta por ciento por el Gobierno federal y los estados, cubre todas las necesidades asistenciales de las personas de menor nivel de renta y de sus dependientes. Unos 50 millones de americanos y residentes se benefician del programa. Otros programas menores, S-Chip (Programa Estatal de Seguro para Menores), la Administración de Sanidad de Veteranos, el seguro médico de los funcionarios del Gobierno federal y los gobiernos estatales o el seguro médico del personal militar completan el panorama asistencial público norteamericano.

Un 40% de los americanos, entre unos y otros, reciben asistencia sanitaria del estado y todos, incluidos los inmigrantes ilegales, reciben asistencia gratuita en caso de emergencia. Más de un 90% de americanos tienen seguro médico. Cuando se ofrecen argumentos pseudos-humanitarios para justificar la nacionalización de la sanidad en EE.UU., el recorte de programas asistenciales existentes y la explosión de la deuda –particularmente por las almas bellas de las redacciones de los periódicos europeos–, hay que empezar por establecer el verdadero contexto de la situación.

### **La reforma demócrata**

La Administración y el Congreso americano actuales han acometido la empresa de modificar el actual estado de cosas con argumentos alternativos o acumulativos, según las encuestas de la semana, ya invocando los –supuestamente– 45 millones de americanos sin seguro médico a los que hay que dar cobertura, ya subrayando que el objeto último de la reforma sería recortar el déficit eliminando ineficacias, ya alegando que se trataba, en fin, de hacer más asequibles los costes de las primas de los seguros médicos al ciudadano medio y de meter en vereda a las sociedades aseguradoras privadas y las condiciones supuestamente leoninas de las pólizas que ofrecen. Esos argumentos, que aparecen y desaparecen o cambian de énfasis, se aderezan con historias individuales sobre la cruel denegación de cobertura o reembolso a tal o cual persona por tal o cual enfermedad que terminan con la persona en la tumba y su familia en bancarrota. La reforma del presidente Obama terminará con cualquier posibilidad de incidentes similares. ¡Ciertamente cualquier persona que no sea Bernie Madoff o George W. Bush estará a favor de algo tan clamorosamente bueno! Además, no se trata de nacionalizar todo el sistema sanitario, sino de hacerlo más accesible y competitivo. ¡Ciertamente cualquier persona que no sea Sarah Palin o Václav Klaus estará a favor de algo tan racional!

Puesto que el objetivo preeminente era dotar de seguro médico a quien carece de él, examinemos en primer lugar la virtualidad de este argumento. El presidente Obama, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, las cadenas CBS, ABC, NBC, MSNBC o CNN, *The New York Times*, *Los Angeles*

*Times*, *The Washington Post* y otros, comenzaron hablando, con el corazón sangrante, de 45 millones de personas carentes de seguro como los destinatarios principales de la reforma. A partir de un momento determinado se tuvieron que dejar a 12 millones de entre éstos por el camino: los inmigrantes ilegales. Una cosa es que por razones de humanidad y de caridad puedan ser atendidos de urgencia y otra que el contribuyente deba comprar pólizas de seguro médico al resto de los ciudadanos del mundo. Así que las personas sin seguro totalizan sólo 33 millones. Pero, ¿realmente necesitan seguro? Habrá aquéllos a quienes resulte demasiado oneroso pagar las primas del seguro en relación con sus ingresos (aunque los casos realmente de incapacidad financiera están cubiertos por *Medicaid*, en su mayor parte). Y habrá quienes carezcan en un momento determinado de cobertura porque hayan perdido su empleo y los beneficios médicos incorporados a su contrato de trabajo o estén cambiando de residencia de un estado a otro y deban cancelar su seguro en un estado y adquirir una póliza en el de su futura residencia. Y habrá profesionales jóvenes y saludables que piensen que no les merece la pena por ahora pagar una prima por servicios médicos que seguramente no van a necesitar y que prefieran pasarse sin seguro y, en su caso, pagar al contado sin necesitan alguna vez ir al médico. Es decir, que de 300 millones de americanos, puede haber 20 millones que realmente carezcan de seguro médico contra su voluntad y necesiten ayuda financiera para adquirirlo.

Pero los proyectos demócratas de reforma no discriminan y pretenden proporcionar cobertura universal por el sencillo expediente de obligar por ley a todo ciudadano americano a adquirir un seguro, subvencionando a los que tengan un nivel menor de renta, y tipificando como actividad delictiva susceptible de pena de prisión la carencia de seguro médico (para lo que ponen el ejemplo del seguro obligatorio de coches). Respecto a los grupos aseguradores privados, el Gobierno federal les obligaría a normalizar sus pólizas de manera que no puedan excluir a ningún ciudadano por padecer enfermedades o discapacidades preexistentes (para lo que ya no ponen el ejemplo de los seguros de automóviles, puesto que, por analogía, eso equivaldría a permitir la adquisición del seguro después de un siniestro total –nadie pagaría nunca una prima hasta el momento posterior al accidente o al momento de caer enfermo).



Pasemos por alto el carácter anticonstitucional de la privación arbitraria de libertad o de la expropiación obligatoria de renta sin causa de interés público o el atropello al sentido común de comparar un seguro de automóviles –que va aparejado al ejercicio de una actividad, la circulación, que necesariamente debe estar sujeta al orden regulatorio del Estado– con el seguro de asistencia sanitaria que el Gobierno federal haría obligatorio por el hecho de respirar. Al final de tanto despotismo orwelliano, los promotores de la reforma, en la Casa Blanca y en el Congreso, admiten que un 4% de americanos, unos 12 millones, seguirán careciendo de seguro. Es decir, que hay que destruir el actual sistema y lanzarse a tumba abierta a violar derechos constitucionales para incrementar la cobertura actual en un 2 ó 3%.

Como el argumento de la cobertura universal da de sí en la práctica lo que viene en comentarse más arriba, el siguiente agarradero es la necesidad de abaratar las primas de la abrumadora mayoría de los ciudadanos que sí tienen seguro médico. La solución de los demócratas no es la reforma de las leyes procesales para impedir las indemnizaciones millonarias por juicios de responsabilidad civil de médicos y hospitales, tan perfectamente frívolos como onerosos, que son la causa fundamental en el encarecimiento de la medicina en EE.UU. No, por supuesto. Para eso las poderosas firmas de abogados de todo EE.UU. dan grandes cantidades de dinero a los candidatos demócratas. El negocio, la extorsión con frecuencia, debe continuar sin imposición de topes indemnizatorios en los estados a dichos litigios. ¿Es acaso facilitar la competitividad en cada estado convirtiendo en posible que el americano medio pueda trasladarse de Illinois a Indiana, o de California a Texas, con su seguro médico sin necesidad de adquirirlo de las empresas aseguradoras del estado de destino? No, tampoco. Eso sería una solución lógica de una economía de mercado y, por tanto, no ha lugar.

La solución de izquierdas es, por supuesto, crear otro programa público, como si no existieran ya otros siete de gran envergadura. El nuevo programa, que revestiría el carácter de una sociedad pública, competiría en cada estado con las demás aseguradoras privadas. Dicho de otro modo, si las naranjas no crecen en Massachussets en invierno, la solución no es

permitir la importación de naranjas de Florida, sino la creación de una empresa agrícola federal en Massachussets que las coseche a un precio que multiplique por cien las que pudieran sin más importarse. Según los genios de la reforma, la sociedad pública aumentaría la competencia y, al hacerlo, abarataría los precios de las primas. Naturalmente, la premisa de esto es que una sociedad aseguradora pública (que tiene detrás el crédito del Gobierno federal y no tiene que ofrecer dividendos a sus accionistas ni siquiera resultar rentable) ofrecería condiciones más ventajosas. La lógica dicta que los particulares y las empresas cancelarían sus pólizas y adquirirían las más baratas ofrecidas por el Gobierno. Las empresas privadas quebrarían y la competencia terminaría.

Habrà quien piense que la desaparición de las empresas aseguradoras privadas es un problema de las aseguradoras y que los consumidores saldrían ganando al pagar menos por sus pólizas. No, y ni siquiera en primer lugar. La nacionalización de la sanidad, por la vía de hecho, significaría que todo el gasto privado terminaría corriendo a cargo del contribuyente, pagando con creces en impuestos, por un lado, lo que deja de pagar en primas por el otro. Y como habría desaparecido la competitividad del mercado, los servicios declinarían sin que hubiera ninguna limitación a los precios que arbitrariamente fijaría entonces el Gobierno.

Por último, y esto es lo más grave, las decisiones sobre qué tratamientos médicos quedarían cubiertos por un sistema nacionalizado de sanidad correrían a cargo de funcionarios y estarían sujetos a determinaciones de carácter fiscal o político. A medida que el envejecimiento de la población fuera aumentando la demanda de servicios e incrementando su coste (hay que tener en cuenta que el coste de los tratamientos médicos en los seis últimos meses de vida de una persona supera con creces a los acumulados durante toda su vida anterior), el Gobierno se enfrentaría a la tentación de racionar la atención médica a los más ancianos o más enfermos, como la vía más directa para contener la factura global del sistema sanitario. Todo el debate sobre la eutanasia y la “muerte digna” se reproduciría entonces amplificado de forma exponencial, barnizando de argumentos “humanitarios” lo que sería una forma descarnada de darwinismo social con motivos fiscales.

Esto lleva sin solución de continuidad a la siguiente cuestión, porque una de las formas en que se va a financiar el coste de la reforma (que, supuestamente, va a aumentar el número de prestaciones para todos y además incluir a varios millones de personas más en el sistema es el recorte del programa *Medicare*) es precisamente recortando el programa *Medicare* en casi medio billón de dólares a lo largo de los próximos diez años. Los líderes Demócratas del Congreso dicen que ese dinero se ahorraría mejorando la gestión y eliminando ineficiencias. ¿En serio? ¿Medio billón de dólares? Es de sentido común que la abuela que necesita una operación de cadera o un tratamiento de cáncer para ganar un par de años de movilidad o de vida será sometida a un implacable escrutinio en términos de coste-beneficio por un panel de burócratas que encontrarán tentador dar el tiempo de la abuela en esta tierra por amortizado. Pasa en muchos otros sistemas públicos de sanidad y es endémico en el Reino Unido o Canadá, por ejemplo. Es más, cuando acabara la sanidad privada, la abuela ni siquiera podría tirar de sus ahorros privados para cubrir su tratamiento, porque los médicos y los hospitales no tendrán la libertad de prestar servicios de forma privada.

La otra fuente de financiación de estos esquemas tan humanitarios e inquebrantablemente progresistas (por el módico precio de un billón de dólares, según el Congreso, o entre 4 y 6 billones, según otras estimaciones) es la subida de impuestos, porque aunque se dice que la reforma incrementará el déficit durante los próximos años, está llamada a disminuirlo a largo plazo (a largo plazo, todos muertos, ya se sabe, y en este caso, tal vez literalmente muertos). Lo cierto es que subirán los impuestos y aumentará el déficit, ambas cosas de manera espectacular. La apretada prosa de las más de 2.000 páginas de proyecto de ley actualmente en estudio en el Senado americano (la Constitución americana cabía en siete artículos) esconde 29 nuevos impuestos. Y la amplia mayoría de los mismos no grava necesariamente a las rentas más altas, entre otras cosas porque ese abrevadero ya ha sido visitado con mucha frecuencia en el pasado. El sistema impositivo americano se parece mucho más al escandinavo que al de una sociedad capitalista: a) el 1% de los americanos de mayor nivel de renta paga un 32% de los impuestos; b) el 5% (incluyendo el 1% anterior) paga un total de 51,4% del total de los

ingresos por impuestos; y c) el 20% de los ciudadanos (englobando las dos categorías anteriores) paga el 80% de los impuestos. Por el contrario, el 50% de los americanos de menor nivel de renta paga sólo un 3,8% de los impuestos, es decir, la clase media-baja y las clases populares prácticamente no pagan impuestos.

## **EPÍLOGO: PRESIDENTE ORWELL**

Cuando aparezca este artículo la suerte de estos esquemas socializantes habrá variado, bien porque hayan sido aparcados hasta una ocasión más propicia, bien porque algunos de sus particulares hayan sufrido modificaciones de una u otra índole, o bien porque la marcha hacia la sanidad que conciben las personas de ideas colectivistas se haya acelerado. A algunos, el triunfo de esas ideas les parecerá un progreso admirable de las sociedades occidentales y a otros les parecerá un jalón en el camino hacia el socialismo con rostro humano o sin él. Lo que se puede concluir es que económicamente el aumento del sector público y el crecimiento irrefrenable del llamado Estado del bienestar en EE.UU. y en Europa son, ya en los niveles actuales, incompatibles con su mantenimiento a largo plazo. Los acontecimientos de 2009 en EE.UU., el gasto sin parangón histórico posible de su Administración y el radicalismo de su programa social, envuelto en la retórica del progreso, el cambio y la esperanza, tendrán consecuencias que van más allá de EE.UU. y más allá de lo económico.

Políticamente, no es casualidad que los dos asuntos a los que la izquierda americana otorga mayor preponderancia, la cuestión del cambio climático y la nacionalización progresiva de la sanidad, son también los que permiten al Estado invadir parcelas más amplias de libertad de los individuos, arrogándose el derecho de dirigir la actividad económica en su conjunto, imponiendo restricciones a los individuos y a las familias respecto a la temperatura de sus termostatos, el color de sus viviendas, su consumo de agua o el papel de baño que pueden o no usar –en el caso del primero–, o decidiendo qué enfermos y qué enfermedades pueden ser curados y a qué precio –en el segundo–. En realidad, ambos

apelan a la fundamental hipocresía de la opinión pública occidental, enamorada de las “causas humanitarias” y del “progreso”, pero a cambio de que nunca se trasladen a la realidad. Especialmente porque, cuando lo hacen, el público empieza a descubrir que las causas humanitarias son radicalmente antihumanas, como cuando se contraponen los intereses del “planeta” a los de los seres humanos que viven en él para argumentar la esterilización forzosa o la política de un hijo por pareja como forma de disminuir la famosa “huella de carbono”; o como cuando se contraponen los intereses de la sociedad con el derecho a la vida de los ancianos o de los no nacidos (y sí, la reforma de la sanidad en EE.UU. recortaría el cuidado de los ancianos pero incluiría el aborto gratuito en las pólizas del seguro público). Hace un año, dos tercios de americanos decían querer la reforma de su sistema sanitario; y hoy, un 60% se opone taxativamente. Hace meses, una mayoría de americanos decía estar preocupada por el calentamiento global; hoy, una abrumadora mayoría rechaza cualquiera de los proyectos americanos o internacionales para “combatirlo”. Desgraciadamente, han elegido unos líderes que desean llevar esos programas adelante y hasta el final. Las elecciones tienen consecuencias.

Cuando un país decide perseguir una quimera fabricada toscamente por sus medios de comunicación y las organizaciones de vanguardia de izquierda (valga la redundancia), la emotividad puede ser intoxicante. Pero el problema ocurre al despertar, algo que está sucediendo ahora cuando muchos desearían no haber sucumbido nunca al sueño.

## **PALABRAS CLAVE**

EE.UU. • Sanidad • Economía internacional

## **RESUMEN**

EE.UU. se parece mucho más a un Estado del bienestar a la europea de lo que muchos pensarían. Pero incluso para un socialista típico, la invasión de la vida de los americanos por su Gobierno, el volumen de gasto de la actual Administración, la explosión del déficit y la acumulación de deuda, serían difíciles de entender. América ya no es lo que era y tampoco seguirá siendo lo mismo un Occidente que llegará a ver y a lamentar el declive de EE.UU. en un futuro predecible. 2008/2009 pasará a la historia como el año en que la hegemonía americana empezó a desvanecerse económica y militarmente. Este artículo es una crónica de las palabras y los hechos que habrán abocado a ese destino. Las elecciones tienen consecuencias.

## **ABSTRACT**

*The US was already more of a social-democratic state than most Europeans think under past Administrations. Even by the standards of your average European socialist, the Orwellian intrusion of the Government in the life of ordinary Americans, the spending binge of the current Administration, the sky rocketing of the deficit and the accumulation of debt for future generations would be hard to process. America is no longer. Neither will be a West that will see and rue the inexorable decline of the US in the foreseeable future. 2008/2009 will go down in history as the year American hegemony started vanishing economically and militarily. This article chronicles the words and the deeds that sealed that fate. Elections have consequences.*